Resolución del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, con domicilio en Metepec, Estado de México; del veinte de marzo de dos mil veinticinco.

VISTO el expediente electrónico formado con motivo del Recurso de Revisión **07483/INFOEM/IP/RR/2024**, promovido por **una** **persona que no proporciona datos de identificación**, a través del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX), a quien en lo sucesivo se le identificará como **EL RECURRENTE**, en contra de la respuesta de la **Secretaría de Movilidad**, en lo sucesivo **EL SUJETO OBLIGADO**, se procede a dictar la presente resolución, con base en los siguientes:

**A N T E C E D E N T E S**

1. El **veintitrés de octubre de dos mil veinticuatro,** se presentó ante el **SUJETO OBLIGADO** vía **SAIMEX**, la solicitud de información pública registrada con el número **00763/SMOV/IP/2024,** mediante el cual se solicitó la siguiente información:

*“Se colicita el padrón de las operadoras mujeres que actualmente operan el estado de méxico unidades de transporte público, a que empresa pertenecen, que unidad manejan, su licencia de conducir y su tarjeton*.*”. (Sic.)*

* **Modalidad de entrega**: Vía SAIMEX.

1. El **catorce de noviembre de dos mil veinticuatro,** el **SUJETO OBLIGADO** dio respuesta, en los siguientes términos:

*“En respuesta a la solicitud recibida, nos permitimos hacer de su conocimiento que con fundamento en el artículo 53, Fracciones: II, V y VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, le contestamos que:, se anexa respuesta” (Sic)*

* Se adjunta el archivo electrónico denominado **Respuesta a solicitud 763.pdf,** constante de dos páginas, de fecha catorce de noviembre del año dos mil veinticuatro, suscrito por el Titular de la Unidad de Transparencia, cuyo contenido es el siguiente:

***Instituto del Transporte***

*…se informa que se han capacitado a 182 mujeres en la Operación del Transporte Público de Pasajeros bajo el Programa MUJERES AL VOLANTE, de las cuales 138 han obtenido licencia para conducir unidades de transporte público. Sin embargo se desconoce si están operando en alguna ruta. Así mismo informo a usted que el Artículo 86 de Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de México y Municipios establece que: Los sujetos obligados serán responsables de los datos personales en su posesión. Los sujetos obligados no podrán difundir, distribuir o comercializar los datos personales contenidos en los sistemas de información, desarrollados en el ejercicio de sus funciones, salvo que haya mediado el consentimiento expreso, por escrito o por un medio de autenticación similar, de los individuos a que haga referencia la información de acuerdo a la normatividad aplicable. Lo anterior, sin perjuicio a lo establecido por esta Ley en los casos de interés público.”.*

***Dirección de Licencias y Operadores***

*“…, le informo que esta Dirección no cuenta con un registro de licencia de conducir que vincule a los operadores con el tipo de unidad que manejen o empresa a la que pertenecen, derivado de que los requisitos documentales necesarios para obtener una licencia de servicio público son los siguientes: • Acta de nacimiento. • CURP. • Identificación oficial vigente con fotografía. • Comprobante de domicilio. • Certificado de antecedentes no penales. Referente a la licencia de conducir o certificado médico toxicológico no es posible proporcionar datos personales, tomando en cuenta que no se encuentra supuesto previsto en los artículos 21 y 66 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios. Sin embargo le informo que se cuenta con un padrón de 1,205 mujeres con licencia de servicio público vigentes en el Estado de México. Sin más por el momento, quedo a sus órdenes.”*

1. El **cuatro de diciembre de dos mil veinticuatro**, el Solicitante interpuso **RECURSO DE REVISIÓN 07483/INFOEM/IP/RR/2024,** en contra de las respuestas emitidas por el **SUJETO OBLIGADO**, señalando las siguientes razones o motivos de inconformidad:

**Acto Impugnado**

*“no entrega la información solicitada”*

**Razones o Motivos de la Inconformidad**

*“negativa a entregar la ifnormación”*

1. Consecutivamente*,* con fundamento en lo dispuesto por el artículo 185 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, el recurso de referencia, fue turnadoa la Comisionada **María del Rosario Mejía Ayala,** respectivamente,con el objeto de su análisis.
2. La Comisionada Ponente con fundamento en lo dispuesto por el artículo 185 fracción II de la ley de la materia, a través del **acuerdo de admisión** de fecha **cinco de diciembre de dos mil veinticuatro**, puso a disposición de las partes el expediente electrónico vía SAIMEX a efecto de que en un plazo máximo de siete días manifestaran lo que a su derecho conviniera, ofrecieran pruebas y alegatos según corresponda al caso concreto, de esta forma para que el **SUJETO OBLIGADO** presentara el Informe Justificado procedente.
3. El **SUJETO OBLIGADO** en fecha **dieciséis de diciembre de dos mil veinticuatro**, rindió el informe justificado correspondiente, por medio de dos archivos electrónicos en formato pdf, cuyo contenido es el siguiente:

* ***Informe justificado 7483.pdf:*** Consistente en el oficio CCT/UT/1598/2024, de fecha dieciséis de diciembre del año dos mil veinticuatro, constante de dos hojas, suscrito por el Titular de la Unidad de Transparencia y Coordinador de Control Técnico de la Secretaría de Movilidad del Gobierno del Estado de México, del que se desprende lo siguiente:

*…en ningún momento se niega el derecho de acceso a la información...*

*… con la finalidad de atender el presente ocurso, los Servidores Públicos Habilitados… competentes para responder el requerimiento de información… emitieron sus pronunciamientos al respecto.*

*Razón de lo anterior…, así como de las respuestas remitidas por los sujetos habilitados, se RATIFICA la respuesta otorgada en solicitud, así como se entrega lo que obra entro de este sujeto obligado.*

*Por tal motivo, tomando en consideración lo expuesto se puede aseverar que las argumentaciones realizadas por el hoy recurrente para la interposición del presente ocurso, carecen de congruencia, resultando infundados los actos impugnados…*

*En mérito de lo anterior, pone a disposición el presente Informe Justificado por este Sujeto Obligado para los efectos legales correspondientes…, por lo que solicito:*

***ÚNICO:*** *Sirva lo expresado como razones suficientes para que esta autoridad resolutora, en términos del artículo 186 fracción I, y 192 fracciones III y V, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, se* ***CONFIRME*** *la respuesta presentada por este Sujeto Obligado a la solicitud primigenia y se tenga por presentada la respuesta de este Sujeto Obligado, a través de este Informe Justificado para todos los efectos legales correspondientes.*

* ***RESPUESTA LICENCIA:*** Consistente en el oficio 22000007010000l/2457/2024, de fecha cinco de diciembre de dos mil veinticuatro, constante de dos hojas, suscrito por el Director del Registro de Licencias y Operadores de la Secretaría de Movilidad del Gobierno del Estado de México, en el que manifiesta:

*…esta Dirección no cuenta con un registro de licencia de conducir que vincule a los operadores con el tipo de unidad que manejen o empresa a la que pertenecen, toda vez que el trámite es personal, por lo que los requisitos documentales necesarios para obtener una licencia de servicio público son los siguientes:*

*• Acta de nacimiento.*

*•CURP.*

*•Identificación oficial vigente con fotografía.*

*•Comprobante de domicilio.*

*•Certificado de antecedentes no penales.*

*Referente a la licencia de conducir o certificado médico toxicológico no es posible proporcionar datos personales, tomando en cuenta que no se encuentra supuesto previsto en los artículos 21 y 66 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios. Sin embargo, le informo que se cuenta con un padrón de 1,205 mujeres con licencia de servicio público vigentes en el Estado de México…*

1. Por su parte, el **RECURRENTE** dejó de realizar manifestaciones que a su derecho conviniera y asistiera.
2. El **trece de marzo de dos mil veinticinco**, se notificó el acuerdo mediante el cual se amplió el plazo para emitir resolución por un término de 15 días adicionales.
3. Este organismo garante no pasa por alto justificar, que el plazo para emitir resolución en el presente asunto encuentra justificación en el alto número de recursos de revisión recibidos, circunstancia atípica que ha rebasado las capacidades técnicas y humanas del personal encargado de la proyección de las resoluciones a dichos medios de impugnación.
4. Por ello, es menester precisar que, si bien se ha excedido el plazo para resolver el presente medio de impugnación, de conformidad con la ley de la materia, el plazo para emitir resolución se encuentra justificado en los elementos para medir su razonabilidad de asuntos conforme a los parámetros establecidos por diversos órganos jurisdiccionales federales, aplicables también en procedimientos análogos, como el que nos ocupa.
5. Así, en términos de lo que establecen los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los recursos deben ser sencillos y resolverse en el menor tiempo posible, tomando en consideración la dilación total del procedimiento; esto es, en un plazo razonable.
6. En ese sentido, el legislador fijó los términos procesales en las leyes, de manera general, sin que pudiera prever la variada gama de casos que son resueltos por los órganos jurisdiccionales o cuasi jurisdiccionales, tanto por la complejidad de los hechos, como por el número de casos que conocen.
7. Por ello, excepcionalmente, si un asunto es resuelto con posterioridad a los plazos señalados por la norma debe analizarse la razonabilidad del tiempo necesario para su resolución, atentos a los siguientes criterios:
   1. Complejidad del asunto: La complejidad de la prueba, la pluralidad de sujetos procesales, el tiempo transcurrido, las características y contexto del recurso.
   2. Actividad Procesal del interesado: Acciones u omisiones del interesado.
   3. Conducta de la Autoridad: Las Acciones u omisiones realizadas en el procedimiento. Así como si la autoridad actuó con la debida diligencia.
   4. La afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso: Violación a sus derechos humanos.
8. De modo que, cuando se trate de un asunto excepcional, por alguna o todas las características mencionadas o bien, cuando el ingreso de asuntos al órgano jurisdiccional o cuasi jurisdiccional respectivo supere notoriamente al que podría considerarse normal, debe concluirse que es una excluyente de responsabilidad en relación con la actuación del funcionario, como ha acontecido en el caso que nos ocupa.
9. Argumento que encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 32/92 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro “TÉRMINOS PROCESALES. PARA DETERMINAR SI UN FUNCIONARIO JUDICIAL ACTUÓ INDEBIDAMENTE POR NO RESPETARLOS SE DEBE ATENDER AL PRESUPUESTO QUE CONSIDERÓ EL LEGISLADOR AL FIJARLOS Y LAS CARACTERÍSTICAS DEL CASO.”, visible en la Gaceta del Seminario Judicial de la Federación con el registro digital 205635.
10. Razones por las cuales cabe concluir que, la resolución al recurso de revisión se solventa hasta esta fecha, debido a que existe una excesiva carga de trabajo en desproporción a la capacidad de los recursos materiales y humanos con que cuenta este Instituto para atender la enorme demanda de usuarios que acuden para que se les garantice su Derecho de acceso a la información Pública y Protección de Datos Personales, aunado a la complejidad de los hechos a los que se refieren, así como al volumen del expediente, la extensión de los escritos y pruebas aportadas y desahogadas por las partes; lo que impide la tramitación de los recursos dentro de los términos legales previamente establecidos por la Ley, por tratarse de causas de fuerza mayor.
11. Por ello, este organismo garante comprometido con la tutela de los derechoshumanos confiados, señala que este exceso del plazo legal para resolver el presente asunto, resulta de carácter excepcional.
12. Al respecto, también son de considerar los criterios sostenidos por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyos rubros y datos de identificación son los siguientes:

“PLAZO RAZONABLE PARA RESOLVER. DIMENSIÓN Y EFECTOS DE ESTE CONCEPTO CUANDO SE ADUCE EXCESIVA CARGA DE TRABAJO.” consultable en el Seminario Judicial de la Federación y su gaceta, con el registro digital 2002351.

“PLAZO RAZONABLE PARA RESOLVER. CONCEPTO Y ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN A LA LUZ DEL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.”, visible en el Seminario Judicial de la Federación y su gaceta, con el registro digital 2002350.

Por ello, este Organismo Garante comprometido con la tutela de los derechos humanos confiados, señala que este exceso del plazo legal para resolver el presente asunto resulta de carácter excepcional.

1. La Comisionada Ponente mediante acuerdo del **trece de marzo de dos mil veinticinco**, decretó el cierre de instrucción del expediente, por lo que no habiendo más que hacer constar, y ----------------------------------------------------------------------------

**C O N S I D E R A N D O**

## **PRIMERO. De la competencia**

1. Este Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, es competente para conocer y resolver de los presentes recursos, de conformidad con el artículo: 6, apartado A, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5, párrafos trigésimo segundo, trigésimo tercero y trigésimo cuarto, fracciones IV y V, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; artículos 1, 2 fracción II, 13, 29, 36 fracciones I y II, 176, 178, 179, 181 párrafo tercero y 185 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; y 7, 9 fracciones I y XXIV, y 11 del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios.

**SEGUNDO.** **De la oportunidad y procedencia.**

1. Los medios de impugnación fueron presentados a través del **SAIMEX,** en el formato previamente aprobado para tal efecto y dentro del plazo legal de quince días hábiles otorgados; para el caso en particular es de señalar que el **SUJETO OBLIGADO** entregó su respuesta el **catorce de noviembre de dos mil veinticuatro** de tal forma que el plazo para interponer el recurso de revisión transcurrió del día **quince de noviembre al seis de diciembre de dos mil veinticinco**; en consecuencia, el ahora **RECURRENTE** presentó su inconformidad el **diecinueve de noviembre de dos mil veinticuatro,** es decir dentro del lapso legalmente establecido para tal efecto.
2. Por otro lado, es de suma importancia señalar que la parte recurrente no proporciona un nombre o datos de identificación como se advierte en el detalle de seguimiento del SAIMEX, no obstante lo anterior, no proporcionar el nombre completo no es motivo para archivar la solicitud de acceso a la información pública como concluida, conforme a lo previsto en el artículo 155, penúltimo párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios que establece lo siguiente:

*"****Las solicitudes anónimas****, con nombre incompleto o seudónimo* ***serán procedentes para su trámite por parte del sujeto obligado ante quien se presente****. No podrá requerirse información adicional con motivo del nombre proporcionado por el solicitante."*

1. Robusteciendo lo anterior se encuentra lo dispuesto en el artículo 6, Apartado A, fracciones III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece:

*"****Artículo 6.-*** *La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.*

*Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:*

*A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:*

*III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos.”* (Sic)

1. Así como el artículo 5 fracción III, párrafo vigésimo noveno, trigésimo y trigésimo primero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, que determina lo siguiente:

*"****Artículo 5.-*** *En el Estado de México todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte, en esta Constitución y en las leyes que de ésta emanen, por lo que gozarán de las garantías para su protección, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse salvo en los casos y bajo las condiciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece”.(Sic)*

*…*

*Toda persona en el Estado de México, tiene derecho al libre acceso a la información plural y oportuna, así como a buscar recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.*

*...*

*El derecho a la información será garantizado por el Estado. La ley establecerá las previsiones que permitan asegurar la protección, el respeto y la difusión de este derecho.*

*Para garantizar el ejercicio del derecho de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, los poderes públicos y los organismos autónomos, transparentarán sus acciones, en términos de las disposiciones aplicables, la información será oportuna, clara, veraz y de fácil acceso. Este derecho se regirá por los principios y bases siguientes:*

*III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos;*

*...*

*VIII. El Estado contará con un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica y de gestión, con capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de transparencia, acceso a la información pública y a la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados en los términos que establezca la ley.”* (Sic)

1. Por otra parte, del contenido del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, se destaca lo siguiente:

*"****Artículo 1****. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.*

*Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.*

*Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley."(Sic)*

1. Esto es, que el derecho humano de acceso a la información pública, se aprecia que toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su interposición, deberá tener acceso a la información pública, es decir, dicho *derecho fundamental exime a quien lo ejerce*, de acreditar su legitimación en la causa o su interés en el asunto, lo que permite la posibilidad de que, incluso, la solicitud de acceso a la información pueda ser anónima o no contener un nombre que identifique al solicitante o que permita tener certeza sobre su identidad.
2. En consecuencia, dado lo expuesto y fundado con anterioridad, se estima que el requisito relativo al nombre del **RECURRENTE** no constituye un presupuesto indispensable de procedencia del Recurso de Revisión, en términos de los artículos 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 1, párrafos segundo y tercero, 6 apartado A fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5 párrafo vigésimo noveno, trigésimo y trigésimo primero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, debido a que el acceso a la información pública es un derecho humano que no requiere legitimación en la causa, si no que únicamente basta con que se encuentre legitimado en el procedimiento de Recurso de Revisión, circunstancia que se acredita en las constancias electrónicas de los expedientes en revisión, de las que se desprende que la parte recurrente, es la misma que realizó la solicitud de acceso a la información pública que ahora se impugna.
3. Asimismo, los escritos contienen las formalidades previstas por el artículo 180 último párrafo de la Ley de la materia actual, por lo que es procedente que este Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, conozca y resuelva el presente recurso.

# **TERCERO. Del planteamiento de la *Litis*.**

1. El **RECURRENTE** solicitó lo siguiente:

* **Padrón de las Operadoras mujeres de las Unidades de Transporte Público.**
* **Empresa a la que pertenecen**
* **Unida que manejan**
* **Licencia de conducir de las Operadoras**
* **Tarjetón de dichas Operadoras**

1. En respuesta, el **SUJETO OBLIGADO** a través del Titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Movilidad del Gobierno del Estado de México,remiten el oficio de fecha catorce de noviembre del año próximo pasado, mediante el cual hacen del conocimiento que de la Unidad Administrativa del Instituto del Transporte, perteneciente a esa Secretaría, se informa que se han capacitado a 182 mujeres en la operación del Transporte Público de Pasajeros, de las cuales 138 han obtenido licencia para conducir unidades de transporte público, sin embargo desconocen si a la fecha se encuentran activas en alguna ruta; así mimo, el Director de Licencias y Operadores informó que no se cuenta con un registro de licencias que vincule al particular con una unidad que manejen, ni mucho menos a la empresa que pertenecen ya que solo forman parte de los requisitos para la obtención de licencia los siguientes documentos:

* Acta de Nacimiento
* Clave Única de Registro de Población (CURP)
* Identificación oficial vigente con fotografía
* Comprobante de Domicilio
* Certificado de Antecedentes no Penales

1. No omite mencionar que respecto a la licencias de conducir o certificado médico toxicológico, no les es posible proporcionar los datos personales de los particulares, ya que de hacerlo, estarían transgrediendo lo estipulado en la Ley de la materia, no obstante a ello, informaron que dentro de su padrón se encuentran 1,205 mujeres con licencia de servicio público vigentes en la entidad.
2. El **RECURRENTE**, se inconformó por **la entrega de información incompleta**, en los siguientes términos: *“no entrega la información solicitada.” (Sic)*
3. En dichas condiciones, la *Litis* a resolver en este recurso se circunscribe a determinar si se actualizan las causales de procedencia previstas en el artículo 179, **fracción V** de la Ley **de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de** México **y Municipios**; fracción que determina la hipótesis jurídica relativa a **la entrega de la información incompleta** por el **SUJETO OBLIGADO**; contexto del cual se dolió **EL RECURRENTE** al momento de interponer su inconformidad.
4. De modo tal que los recursos de revisión se abocaran en determinar si el **SUJETO OBLIGADO** con su respuesta ciertamente actualiza la causal de procedenciaantes señalada; asimismo, determinar si se vulnera el derecho de acceso a la información del particular por la inobservancia a los principios contenidos en el artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, los cuales señala entre otros, que en la generación y entrega de información se deberá garantizar que sea oportuna, expedita, completa e integral.

**CUARTO. Del estudio y resolución del asunto**

1. **Del derecho de acceso a la información.**
2. El Derecho de Acceso a la Información Pública, es un derecho humano reconocido en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 19.2; en la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 13.1; en el artículo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo quinto de la Particular del Estado de México.
3. Definiendo el Derecho de Acceso a la Información Pública como: *La igualdad de oportunidades para recibir, buscar e impartir información[[1]](#footnote-1)en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal,[[2]](#footnote-2)*que se constituye como una herramienta fundamental para ejercer *el control democrático de las gestiones estatales, de forma tal que puedan cuestionar, indagar y considerar si se está dando un adecuado cumplimiento a las funciones públicas,[[3]](#footnote-3)*fomentando *la transparencia de las actividades estatales y* promoviendo *la responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión pública,[[4]](#footnote-4)*que permite *saber qué están haciendo los gobiernos por sus pueblos, sin lo cual la verdad languidecería y la participación en el gobierno permanecería fragmentada.*
4. En México, además de los derechos, están reconocidas las garantías para su protección, en ese sentido el párrafo tercero de artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone lo siguiente:

*“****Artículo 1.-***

*(…)*

*Todas las* *autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.*

*(…)*”.

1. Por lo anterior, se deduce que el Derecho de Acceso a la Información Pública es un Derecho Humano de Fuente Internacional y Constitucionalmente reconocido. Además del derecho, también se reconocen garantías para su protección, lo que vincula con el mandato del párrafo tercero del mismo artículo.
2. Así, conforme a la Constitución Política de las Estado Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México respectivamente, el cumplimiento de las garantías primarias, entendidas como obligaciones inmediatamente relacionadas con el Derecho de Acceso a la Información Pública, permiten que todas las autoridades, en el ámbito de sus atribuciones lo respeten, protejan y garanticen.

***Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos***

***“Artículo 6.***

*(…)*

*Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:*

***A****.* ***Para el ejercicio del derecho de acceso a la información****, la Federación y* ***las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:***

***I. Toda la información en posesión de cualquier******autoridad****, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y* ***municipal****,* ***es pública*** *y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes.* ***En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones****, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información.”*

***Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México***

***“Artículo 5****.-*

*(…)*

***El derecho a la información será garantizado por el Estado. La ley establecerá las previsiones que permitan asegurar la protección, el respeto y la difusión de este derecho****.*

*Para garantizar el ejercicio del derecho de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, los poderes públicos y los organismos autónomos, transparentarán sus acciones, en términos de las disposiciones aplicables, la información será oportuna, clara, veraz y de fácil acceso.*

***Este derecho se regirá por los principios y bases siguientes****:*

***I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismos de los*** *Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos estatales y* ***municipales****, así como del gobierno y de la administración pública municipal y sus organismos descentralizados, asimismo de cualquier persona física, jurídica colectiva o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito estatal y municipal,* ***es pública*** *y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de interés público y seguridad, en los términos que fijen las leyes.* ***En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad****.* ***Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones****, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información.”*

1. Según el artículo 150 de la Ley de Transparencia del Estado, la solicitud es la garantía primaria del Derecho de Acceso a la Información, además, establece que se regirá *por los principios de simplicidad, rapidez gratuidad del procedimiento, auxilio y orientación a los particulares*, contemplando el derecho de las personas con discapacidad y hablantes de lengua indígena.
2. El Derecho de Acceso a la Información se garantiza y respeta oportunamente, y según lo que dispone la Ley, las *solicitudes de acceso a la información*.
3. Así entonces, se procede analizar, en primer lugar, si el **SUJETO OBLIGADO** al atender la solicitud de acceso a la información, satisfizo la garantía primaria del derecho según lo dispuesto por el artículo 150 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios y en segundo término si cumplió con su deber de respetar y garantizar el derecho, entregando la información solicitada.

**II. De la información solicitada y la respuesta del SUJETO OBLIGADO**

1. Precisado lo anterior, se procede al análisis del requerimiento planteado por la persona solicitante y la respuesta proporcionada por el **SUJETO OBLIGADO**, a efecto de determinar si el derecho de acceso se satisfizo con las mismas, o en su defecto, señalar los documentos que en el ejercicio de sus atribuciones pudo haber generado, y que, de manera enunciativa más no limitativa, pudieran colmar dicho derecho.
2. En este sentido se inserta el siguiente cuadro de análisis:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Información Solicitada** | **Respuesta** | **Informe Justificado** | **Comentario** |
| 1. Padrón de las Operadoras Mujeres de las Unidades de Transporte Público | El servidor público habilitado del Instituto de Transporte, refirió que se han capacitado a 182 mujeres en la Operación de Transporte Público de Pasajeros, de las cuales 138 mujeres han obtenido la licencia para conducir unidades de transporte público; no obstante a ello el servidor público habilitado de la Dirección de Licencias y Operadores, indicó que se cuenta con un padrón de 1, 205 mujeres con licencia de servicio público vigentes en el Estado de México. | Ratifica respuesta | El requerimiento fue atendido por medio del Servidor Público Habilitado competente |
| 1. Empresa al que pertenecen | El servidor público habilitado de la Dirección de Licencias y Operadores, informó que no se cuenta con un registro de licencia de conducir que vincule a los operadores con la empresa a la que pertenecen. | Ratifica respuesta | El requerimiento fue atendido por medio del Servidor Público Habilitado competente |
| 1. Unidad que manejan | El servidor público habilitado de la Dirección de Licencias y Operadores, informó que no se cuenta con un registro de licencia de conducir que vincule a los operadores con el tipo de unidad que operan. | Ratifica respuesta | El requerimiento fue atendido por medio del Servidor Público Habilitado competente |
| 1. Licencia de Conducir de las Operadoras de Transporte Público | El servidor público habilitado del Instituto del Transporte, refirió que de acuerdo a los establecido en el artículo 86 de la ley de la materia, los SUJETOS OBLIGADOS, no podrán difundir, distribuir o comercializar los datos personales contenidos en los sistemas de información, desarrollados en el ejercicio de sus funciones, salvo que exista el consentimiento expreso; así mismo, el Servidor Público Habilitado de la Dirección de Licencias y Operaciones indicó que no les es posible proporcionar datos personales, ya que la solicitud no se encuentra dentro de los supuestos establecidos en los artículos 21 y 66 de la ley de la materia. | Ratifica respuesta | El requerimiento fue atendido por medio del Servidor Público Habilitado competente |
| 1. Tarjetón de las Operadoras mujeres de Transporte Público | El Servidor Público Habilitado de la Dirección de Licencias y Operaciones indicó que no les es posible proporcionar el certificado médico toxicológico, ya que poseen datos personales, y la presente solicitud no se encuentra dentro de los supuestos establecidos en los artículos 21 y 66 de la ley de la materia. | Ratifica respuesta | El requerimiento fue atendido por medio del Servidor Público Habilitado competente |

1. De lo expuesto en el cuadro descriptivo, se advierte que se atendió el punto marcado con el número 1 en el cuadro que antecede, toda vez el **SUJETO OBLIGADO**, informó que en el Estado de México se cuenta con un padrón de 1,205 mujeres con licencia de servicios público, de las cuales, 138 recibieron capacitación en la Operación del Transporte Público de Pasajeros.
2. Por su parte, el artículo 12, de la Ley de la materia establece que los Sujetos Obligados sólo proporcionarán la información que generen, recopilen, administren, manejen, procesen, archiven o conserven, y sólo facilitarán las que se les requiera y obre en sus archivos, en el estado en el que se encuentre, sin la obligación de generarla, resumirla, efectuar cálculos o practicar investigaciones; tal y como se señala a continuación:

*“****Artículo 12.****Quienes generen, recopilen, administren, manejen, procesen, archiven o conserven información pública serán responsables de la misma en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables.*

*Los sujetos obligados sólo proporcionarán la información pública que se les requiera y que obre en sus archivos y en el estado en que ésta se encuentre. La obligación de proporcionar información no comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés del solicitante; no estarán obligados a generarla, resumirla, efectuar cálculos o practicar investigaciones.”*

1. En síntesis, el derecho de acceso a la información pública se satisface en aquellos casos en que se entregue el soporte documental en que conste la información pública, toda vez que, los Sujetos Obligados no tienen el deber de generar, poseer o administrar la información pública con el grado de detalle solicitado; esto es, que no tienen el deber de generar un documento ad hoc, para satisfacer el derecho de acceso a la información pública.
2. Como apoyo a lo anterior, es aplicable el Criterio 03-17, emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que dice:

***“No existe obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de acceso a la información.****Los artículos 129 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 130, párrafo cuarto, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, señalan que los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar, de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones, conforme a las características físicas de la información o del lugar donde se encuentre. Por lo anterior, los sujetos obligados deben garantizar el derecho de acceso a la información del particular, proporcionando la información con la que cuentan en el formato en que la misma obre en sus archivos; sin necesidad de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de información.*

*Resoluciones:*

*RRA 0050/16. Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. 13 julio de 2016. Por unanimidad. Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña Llamas.*

*RRA 0310/16. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 10 de agosto de 2016. Por unanimidad. Comisionada Ponente. Areli Cano Guadiana.*

*RRA 1889/16. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 05 de octubre de 2016. Por unanimidad. Comisionada Ponente. Ximena Puente de la Mora.”*

1. Asimos, el artículo 24, de la Ley de la materia, dispone que los Sujetos Obligados sólo proporcionarán la información pública que generen, administren o posean en el ejercicio de sus atribuciones; por consiguiente, la información pública se encuentra a disposición de cualquier persona, lo que implica que es deber de los Sujetos Obligados, garantizar el derecho de acceso a la información pública.
2. En esta misma tesitura, es de subrayar que el derecho de acceso a la información pública, consiste en que la información solicitada conste en un soporte documental en cualquiera de sus formas, a saber: expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades, funciones y competencias de los Sujetos Obligados; los que, podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico, de conformidad con el artículo 3, fracción XI, de la Ley de la materia, el cual dispone lo siguiente:

***“Artículo 3.****Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:*

*(…)*

***XI. Documento:****Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades, funciones y competencias de los sujetos obligados, sus servidores públicos e integrantes, sin importar su fuente o fecha de elaboración.****Los documentos podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico;***

*(…)”*

1. Siendo aplicable el Criterio de interpretación en el orden administrativo número 0002- 11, emitido por Acuerdo del Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México “Gaceta del Gobierno”, el diecinueve de octubre de dos mil once, cuyo rubro y texto dispone:

*“CRITERIO 0002-11 INFORMACIÓN PÚBLICA, CONCEPTO DE, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA. INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS 2°, FRACCIÓN V, XV, Y XVI, 3°, 4°, 11 Y 41. De conformidad con los artículos antes referidos, el derecho de acceso a la información pública, se define en cuanto a su alcance y resultado material, el acceso a los archivos, registros y documentos públicos, administrados, generados o en posesión de los órganos u organismos públicos, en virtud del ejercicio de sus funciones de derecho público, sin importar su fuente, soporte o fecha de elaboración. En consecuencia el acceso a la información se refiere a que se cumplan cualquiera de los siguientes tres supuestos: 1) Que se trate de información registrada en cualquier soporte documental, que en ejercicio de las atribuciones conferidas, sea generada por los Sujetos Obligados; 2) Que se trate de información registrada en cualquier soporte documental, que en ejercicio de las atribuciones conferidas, sea administrada por los Sujetos Obligados, y 3) Que se trate de información registrada en cualquier soporte documental, que en ejercicio de las atribuciones conferidas, se encuentre en posesión de los Sujetos Obligados.”*

1. En esa tesitura, se observa que el **SUJETO OBLIGADO,** colmo lo requerido en el punto número 1 del cuadro descriptivo; no obstante por lo que respecta al punto número 2, 3, 4 y 5, se realizara el estudio correspondiente.

* **Punto dos, tres y cinco del cuadro descriptivo**

1. Por cuanto hace a los requerimientos marcados con los numerales 2, 3 y 5 del cuadro descriptivo, respecto a que se indique a que empresa pertenecen; así como, la unidad que manejan, en su calidad de Operación del Transporte Público de Pasajeros, el SUJETO OBLIGADO, a través de la Dirección de Licencias y Operadores advirtió, que **no cuentan con un registro de licencias de conducir que vincule a los operadores con el tipo de Unidad que manejan o empresa a la que pertenecen**, al respecto, resulta indispensable traer a colación lo establecido en el Manual General de Organización de la Secretaría de Movilidad a través de las Direcciones Generales de Movilidad, mismas que tienen como objetivo y funciones las siguientes:

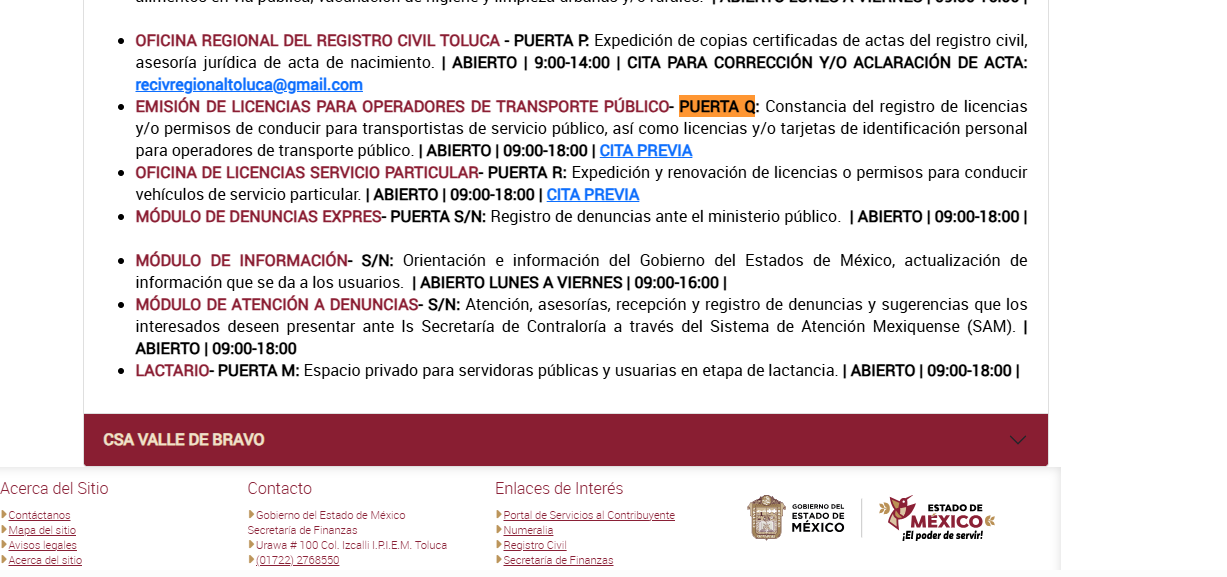
***OBJETIVO:***

*Promover, regular y coordinar programas de estudios de ingeniería de tránsito en la infraestructura vial, para el desarrollo integral de movilidad eficiente y segura que garanticen la accesibilidad a las personas, así como generar políticas de desarrollo del servicio público de transporte, a través de la planeación, coordinación y aplicación de sus sistemas integrales de transporte, autorizar la realización de visitas de inspección y verificación que permitan supervisar la puntual observancia y cumplimiento de los lineamientos legales y obligaciones a cargo de las y los concesionarios y permisionarios del servicio público de transporte y sus servicios conexos en la región de su competencia.*

***FUNCIONES:***

* *(…)*
* *Promover la instrumentación de programas y proyectos estratégicos que permitan mejorar las condiciones en que se realizan los desplazamientos, eficientar la operación y prestación del servicio público de transporte, en sus diversas modalidades, así como la implementación de corredores de mediana capacidad promoviendo el derecho humano de la movilidad, la equidad de género, el combate a la violencia en contra de las mujeres, adolescentes, niñas y niños, y cualquier tipo de discriminación.*
* *Intervenir como conciliador en el ámbito de su competencia, en la solución de conflictos entre concesionarios y permisionarios del servicio público de transporte, derivados de la prestación de este.*
* *Instrumentar acciones en coordinación con la Dirección General del Registro Estatal de Transporte Público para la* ***emisión de concesiones, permisos, autorizaciones, licencias, tarjetas de identificación personal para operadores de transporte público, tarjetas de circulación y placas de matriculación que se soliciten; y*** *esto es cuenten con el soporte documental y validación correspondiente. Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.*

1. Establecido lo anterior, si bien es cierto el SUJETO OBLIGADO, a través de la Dirección de Licencias y Operadores, se pronunció a la solicitud de información, negando poseer documentación respecto al tipo de Unidad que operan las conductoras del Transporte Público del Estado México; así como a la empresa a la que pertenecen, también lo es que el Manual General de Organización de la Secretaría de Movilidad, nos refiere que las Direcciones Generales de Movilidad de la entidad, tienen dentro de sus funciones en Coordinación con la Dirección General del Registro Estatal de Transporte Público, instrumentar acciones para la emisión de tarjetas de identificación personal para operadores de transporte público, documento que de acuerdo al Manual de Procedimientos de la Dirección de Registro de Licencias y Operaciones, posee entre otros datos el nombre de la empresa; así como los datos de la unidad que operan, por tanto, no cumplió con el procedimiento de **búsqueda exhaustiva y razonable**, en relación a la petición marcada con el número 2, 3 y 5 del cuadro comparativo.
2. Al respecto es necesario precisar que la página Oficial del Centro de Servicios Administrativos de la Secretaria de Movilidad, establece entre los trámites y servicios que ofrece lo relativo a las Tarjeta de Identificación Personal para Operadores de Transporte Público, como se advierte a continuación: (Consulta: https://csa.edomex.gob.mx/node/232)



1. En atención a lo anterior, se advierte que el Sujeto Obligado, genera posee y administra la información relativa las Tarjeta de Identificación Personal para Operadores de Transporte Público, las cuales contendrán lo solicitado en el punto 2 y 3 del cuadro descriptivo, motivo por el cual resulta procedente ordenar el dichas documentales.
2. Así las cosas, cabe resaltar que, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, en su artículo 150, establece que el procedimiento de acceso a la información es la garantía primaria del derecho en cuestión y se rige por los principios de simplicidad, rapidez gratuidad del procedimiento, auxilio y orientación a los particulares, así como, atención adecuada a las personas con discapacidad y a los hablantes de lengua indígena con el objeto de otorgar la protección más amplia del derecho de las personas.
3. En este sentido, para atender las solicitudes de información, los Sujetos Obligados contarán con un área denominada Unidad de Transparencia[[5]](#footnote-5), la cual será presidida por un Titular, quien fungirá como enlace entre éstos y los solicitantes. Dicha Unidad será la encargada de tramitar internamente la solicitud de información y tendrá la responsabilidad de verificar en cada caso que la misma no sea confidencial o reservada. Asimismo, contará con las facultades internas necesarias para gestionar la atención a las solicitudes de informaciónen los términos de la Ley General y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios[[6]](#footnote-6).
4. De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, las Unidades de Transparencia tendrán, entre sus atribuciones, las siguientes:
   * Recibir, tramitar y dar respuesta a las solicitudes de acceso a la información;
   * Realizar, con efectividad, los trámites internos necesarios para la atención de las solicitudes de acceso a la información;
   * Entregar, en su caso, a los particulares la información solicitada; y
   * Efectuar las notificaciones a los solicitantes.
5. Otros sujetos del proceso de atención a las solicitudes de información son los servidores públicos habilitados, quienes serán designados por el titular del **SUJETO OBLIGADO** a propuesta del responsable de la Unidad de Transparencia[[7]](#footnote-7) y tendrán, entre sus atribuciones, las siguientes[[8]](#footnote-8):
   * Localizar la información que le solicite la Unidad de Transparencia; y
   * Proporcionar la información que obre en los archivos y que le sea solicitada por la Unidad de Transparencia.
6. De tal manera que cada una de las áreas administrativas del **SUJETO OBLIGADO** deberá contar con un servidor público habilitado, quien será, a su vez, el enlace entre la Unidad de Transparencia y el área administrativa, y se encargará de buscar, localizar y proporcionar la información que se requiera a través de las solicitudes de acceso a la información.
7. Aunado a lo anterior, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, en su artículo 53, establece las funciones correspondientes a esta Unidad; mismas que se inserta a continuación:

***“Artículo 53****. Las Unidades de Transparencia tendrán las siguientes funciones:*

*I. Recabar, difundir y actualizar la información relativa a las obligaciones de transparencia comunes y específicas a la que se refiere la Ley General, esta Ley, la que determine el Instituto y las demás disposiciones de la materia, así como propiciar que las áreas la actualicen periódicamente conforme a la normatividad aplicable;*

***II. Recibir, tramitar y dar respuesta a las solicitudes de acceso a la información;***

*III. Auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes de acceso a la información y, en su caso, orientarlos sobre los sujetos obligados competentes conforme a la normatividad aplicable;*

***IV. Realizar, con efectividad, los trámites internos necesarios para la atención de las solicitudes de acceso a la información;***

*V. Entregar, en su caso, a los particulares la información solicitada;*

*VI. Efectuar las notificaciones a los solicitantes;*

*VII. Proponer al Comité de Transparencia, los procedimientos internos que aseguren la mayor eficiencia en la gestión de las solicitudes de acceso a la información, conforme a la normatividad aplicable;*

*VIII. Proponer a quien preside el Comité de Transparencia, personal habilitado que sea necesario para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información;*

***IX. Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información, sus respuestas, resultados, costos de reproducción y envío, resolución a los recursos de revisión que se hayan emitido en contra de sus respuestas y del cumplimiento de las mismas;***

*X. Presentar ante el Comité, el proyecto de clasificación de información;*

*XI. Promover e implementar políticas de transparencia proactiva procurando su accesibilidad;*

*XII. Fomentar la transparencia y accesibilidad al interior del sujeto obligado;*

*XIII. Hacer del conocimiento de la instancia competente la probable responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Ley; y*

*XIV. Las demás que resulten necesarias para facilitar el acceso a la información y aquellas que se desprenden de la presente Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables. (…)*

*Los sujetos obligados deberán implementar a través de las unidades de transparencia, progresivamente y conforme a sus previsiones, las medidas pertinentes para asegurar que el entorno físico de las instalaciones cuente con los ajustes razonables, con el objeto de proporcionar adecuada accesibilidad que otorgue las facilidades necesarias, así como establecer procedimientos para brindar asesoría y atención a las personas con discapacidad, a fin de que puedan consultar los sistemas que integran la Plataforma Nacional de Transparencia, presentar solicitudes de acceso a la información y facilitar su gestión e interponer los recursos que las leyes establezcan.”*

1. De lo expuesto y con relación a lo solicitado, se tiene que, la Unidad de Transparencia es la encargada de recibir, tramitar y dar respuesta a las solicitudes de acceso a la información, sin embargo dentro del estudio se advierte que, el **SUJETO OBLIGADO** no cumplió con el procedimiento de búsqueda exhaustiva y razonable, pues manifestó no contar con la información solicitada, ello a pesar de que existen ordenamientos legales que establecen la obligatoriedad de poseer la información solicitada.
2. De lo anterior, es de precisar que la información que resulta de interés para el particular debe obrar en los archivos del SUJETO OBLIGADO y por lo tanto debe proceder a realizar una búsqueda exhaustiva a efecto de proporcionar los documentos, ya que incumplió con el procedimiento de búsqueda establecido en el artículo 162 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, por lo que no se acredito que la búsqueda fuera exhaustiva y razonable.

* **Punto cuatro del cuadro descriptivo**

1. En este orden de ideas, por cuanto hace al requerimiento consistente en la solicitud de licencias de conducir de las operadoras de Transporte Público en el Estado de México, el SUJETO OBLIGADO, se pronunció indicando que no le es posible proporcionar datos personales, ya que no se encuentra dentro de los supuestos establecidos en los artículos 21 y 66 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios, situación que confirmo en el respectivo informe justificado.
2. En ese sentido, resulta viable traer a colación lo establecido en el Manual de Organización de la Secretaría de Movilidad la Dirección del Registro de Licencias y Operadores cuenta con el siguiente objetivo y funciones:

***OBJETIVO:***

*Planear, coordinar, dirigir y gestionar las* ***actividades relativas a la expedición*** *de licencias de servicio particular, permisos de práctica y* ***licencias de servicio público en sus distintas modalidades****, así como Integrar, normar y actualizar el registro respectivo, con estricto apego a la normatividad vigente y aplicable.*

***FUNCIONES:***

*-Administrar al personal, recursos materiales, y las actividades de las oficinas estatales y módulos móviles de emisión de licencias de servicio particular y permisos para conducir, así como licencias de servicio público, en sus diferentes modalidades, a efecto de eficientar el servicio y trámites prestados en el ámbito de las atribuciones conferidas.*

***-Verificar que los trámites de expedición de licencias de conducir de servicio público y particular, así como los permisos provisionales de práctica en sus distintas modalidades se realicen de forma sencilla y expedita.***

***-Implementar los mecanismos necesarios para garantizar el suministro de formas valoradas y material que se requiera para la expedición de licencias de conducir de servicio público y particular, permisos provisionales de práctica y el material necesario para la implementación de programas toxicológicos y de detección de alcohol a las y los choferes del transporte público.***

***-Dar atención a las solicitudes de información de particulares, así como a los requerimientos formulados por las autoridades administrativas o de procuración de justicia y/o jurisdiccional, que versen sobre información contenida en el Registro de Licencias y Operadores.***

*-Coadyuvar con las autoridades competentes en la implementación de programas toxicológicos y de detección de alcohol a las y los choferes del transporte público.*

*-Capacitar al personal a su cargo, con el propósito de darles a conocer los sistemas y procesos en la materia, según las necesidades del servicio.*

*-Dirigir y organizar al personal a su cargo, en las áreas que estime pertinentes, a fin de atender de manera oportuna los asuntos de su competencia, con estricto apego a la normatividad aplicable.*

*-Certificar y/o constatar los documentos que obren en sus archivos cuando se refieran a asuntos de su competencia.*

*-Acordar con la o el Director General del Registro Estatal de Transporte Público, los asuntos que correspondan a la Dirección.*

*-Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia*

1. De lo anterior, se observa que la Dirección del Registro de Licencias y Operadores es el área encargada de la Secretaría de Movilidad que da atención a las solicitudes de expedición de las licencias de conducir de servicio público y particular.
2. En esa línea de estudio la Secretaría de Movilidad en su estructura también cuenta con el Departamento de Licencias e Infracciones, quien de acuerdo con el Manual de Organización cuenta con el siguiente objetivo y funciones.

***OBJETIVO:***

***Integrar, actualizar, registrar y establecer el manejo de la información relativa a las licencias de conducir de servicio público y particular****, así como los permisos provisionales de práctica en sus distintas modalidades, por medio de los mecanismos operativos y administrativos señalados para tal efecto y llevar a cabo la verificación de la información.*

***FUNCIONES:***

***-****Supervisar la operación de los módulos de emisión de licencias de conducir de servicio público y particular, así como los permisos provisionales de práctica en sus distintas modalidades.*

***-Coordinar al personal adscrito a la Dirección del Registro de Licencias y Operadores, encargado de la emisión de licencias de licencias de conducir de servicio público y particular, así como los permisos provisionales de práctica en sus distintas modalidades.***

***-Realizar las gestiones a fin de garantizar el suministro de consumibles, materiales e insumos necesarios para la emisión de licencias y permisos para conducir,*** *así como certificados médico-toxicológicos personal para operadoras y operadores de transporte público.*

***-Administrar el almacén los consumibles y material necesario relativo a licencias y permisos para*** *conducir y tomar las medidas necesarias para su reabastecimiento.*

***-****Controlar las entradas y salidas del almacén de los consumibles y material para la emisión de licencias y permisos para conducir.*

***-****Supervisar a los módulos, unidades móviles de expedición y cajeros de renovación de licencias de conducir de servicio público y particular, así como solicitar los informes que estime pertinentes, relativos al uso de los combustibles y material dotado, a fin de verificar el uso correcto de dichos bienes.*

***-Verificar que los trámites de expedición de licencias y permisos para conducir se realicen de forma pronta y expedita.***

***-****Proponer la elaboración de nuevos formatos y documentos relativos a las funciones de la Dirección del Registro de Licencias y Operadores.*

***-****Participar, en coordinación con la Dirección del Registro de Licencias y Operadores, en los proyectos que le sean asignados.*

***-****Informar periódicamente a la Dirección del Registro de Licencias y Operadores sobre las acciones desarrolladas en el ámbito de su competencia.*

*-Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.*

1. De lo anterior, se observa que el Departamento de Licencias e Infracciones es el área encargada de la Secretaría de Movilidad que regula y resguarda la información relativa a los formatos y expedición de las licencias de conducir de transporte público y de vehículos particulares.
2. Seguidamente la Secretaría de Movilidad también cuenta con el Departamento de Multas y Sanciones quien de acuerdo con el Manual General de Organización cuenta con el siguiente objetivo y funciones.

***OBJETIVO:***

*Registrar y controlar la aplicación de las infracciones y multas impuestas a las y los prestadores del servicio público de transporte en sus diversas modalidades, impuestas por violaciones a las leyes y reglamentos en materia de transporte público.*

***FUNCIONES:***

***-Concentrar y mantener actualizado el banco de datos estadísticos relacionados con las multas e infracciones impuestas a las y los prestadores del servicio público, de acuerdo con los datos e informes remitidos por las Direcciones Generales de Movilidad.***

*-Concentrar y conservar actualizado el banco de datos con la información de las actas constitutivas de las sociedades mercantiles de transporte público, de conformidad con la información remitida por la Dirección General de Asuntos Jurídicos e Igualdad de Género.*

***-Concentrar y mantener actualizado el banco de datos estadísticos de los trámites de liberación de vehículos detenidos en garantía de pago de una infracción o multa por orden de autoridad competente, de acuerdo con la información que remitan las Direcciones Generales de Movilidad en concordancia con las supervisiones de verificación e inspección que realicen.***

*-Mantener coordinación permanente con la Dirección General de Asuntos Jurídicos e Igualdad de Género para conocer la normatividad vigente en la aplicación de sanciones e infracciones a los prestadores de servicio público de transporte.*

*-Atender las solicitudes de las y los concesionarios o permisionarios, respecto a la información que obra en los archivos.*

*-Participar, en coordinación con la Subdirección de autorizaciones y permisos, en los proyectos que le sean asignados.*

*-Informar periódicamente a la Subdirección de Registro y Control sobre las acciones desarrolladas en el ámbito de su competencia*

*-Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia.*

1. Ahora bien, una vez establecida la fuente obligacional del **SUJETO OBLIGADO** de administrar, generar y poseer la información solicitada, es necesario centrar que la información de las licencia de conducir de las operadoras de transporte público de la entidad, se entiende que es información que pertenece a la vida privada de una persona física y que no forma parte de información que tenga el carácter de pública.
2. Sobre el tema, se tiene presente que, este Instituto emitió el Criterio Relevante 01/18, de la Segunda Época de este Instituto, que establece que el nombre del titular de una licencia, como en el caso que nos ocupa, es información confidencial, cuando no involucra aprovechamiento de recursos públicos.

***“Nombre del titular de una licencia que no involucre el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos, constituye un dato personal susceptible de clasificar como confidencial.*** *El artículo 1, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos determina que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, por su parte el artículo 6, apartado A, fracciones I y II, de dicho ordenamiento establece que toda información en posesión de los sujetos obligados es pública y sólo podrá limitarse de manera justificada por razones de interés público, seguridad nacional, y para proteger la vida privada y datos personales en los términos precisados por las Leyes reglamentarias. Ahora bien, el artículo 92, fracción XXXII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, señala que el nombre de los titulares de las licencias es un dato de carácter público, no obstante, para su aplicación, dicho numeral debe ser interpretado de manera armónica y sistemática con el ordenamiento reglamentario de la materia de transparencia y protección de datos personales, pues la intromisión a los datos personales de particulares únicamente se verá justificada cuando se involucre el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos en términos de lo dispuesto por los artículos 6, 92, fracción XXXII, 122 y 143, fracción I, de la Ley de Transparencia referida en concordancia con lo establecido por los numerales 6 y 15 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la entidad. En ese sentido, el nombre de los titulares de licencias constituye un dato personal que debe ser tratado bajo los principios y términos de la ley reglamentaria de la materia, y para su publicidad se requerirá que la expedición de la licencia correspondiente involucre el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos, caso contrario se deberá clasificar como confidencial.”*

1. En el Criterio citado, contempla que si bien el nombre de los titulares de las licencias es un dato de carácter público, en términos del artículo 92, fracción XXXII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, dicho precepto legal debe ser interpretado de manera armónica y sistemática, pues la intromisión a los datos personales de particulares únicamente se verá justificada cuando involucre el aprovechamiento de bienes, servicios o recursos públicos; por lo que constituye un dato personal, a menos que se actualice alguno de los supuestos previamente señalados.
2. No obstante, se considera que el nombre localizado en una licencia de conducir vehículos de transporte público, guarda cierto **interés público**, dado que la actividad de desplazamiento de personas que ejerce, es regulada por la Secretaría de Movilidad del Estado de México, pues ayuda a transparentar la gestión pública.
3. En ese sentido, el artículo 92, fracción XXXII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, establece que los Sujetos Obligados deberán poner a disposición del público de manera permanente y actualizada de las licencias otorgadas, especificando los titulares de estas, debiendo publicarse el objeto, **nombre** o razón social, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto o modificación.
4. Cabe puntualizar que la licencia de conducir, se refiere al documento personal e intransferible que habilita al titular para prestar el servicio de conducir un vehículo automotor por la vía pública, la cual está regulada por las Leyes respectivas.
5. En ese sentido, de acuerdo con el artículo 92, fracción XXXII de la Ley en cita, el legislador contempló como información de interés público y que debe estar disponible para consulta, aquellas licencias otorgadas, especificando el nombre de su titular y las características principales. Ello, con la finalidad de asegurar su mayor difusión, que permita a los ciudadanos evaluar de manera permanente los indicadores más importantes de la gestión pública, como lo son, emisión y suspensión de licencias de conducir a operadores de transporte público, pues es facultad exclusiva de la Secretaría de Movilidad.
6. Bajo tal premisa, podría concluirse que la hipótesis normativa del artículo 92, fracción XXXII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y los Municipios, se traduce en una excepción a la información personal que debe ser protegida, tal como es en el caso que nos ocupa el nombre del titular de una licencia de conducir vehículos automotores afectos al servicio público, por lo que no es dable, como se asienta en el Criterio Relevante, considerar que el nombre de los titulares de licencias de conducir deba ser considerado confidencial, aún y cuando el mismo no involucre aprovechamiento de bienes o recursos públicos.
7. Se puede referir que, el artículo 91 de dicho ordenamiento jurídico, establece que la información pública será restringida excepcionalmente, cuando ésta sea clasificada como reservada o confidencial; por lo que, se colige que las obligaciones de transparencia no superan de forma automática la prohibición de no difundir datos personales sin el consentimiento de su titular, como sucede en el caso concreto.
8. Ante tales circunstancias, se desprende que, en el caso concreto, sobreviene una **colisión de derechos fundamentales,** esto es, por una parte, se tiene el derecho de acceso a la información, para conocer las licencias para conducir vehículos automotores de transporte público, y por la otra, el derecho a la protección de los nombres de aquellas personas quienes obtuvieron una licencia, lo cual implica dar a conocer datos personales confidenciales consistentes, en el nombre de personas físicas, de la concesión y del vehículo, lo que puede vincularlo con la actividad que desarrollan y el lugar en el que se ubican.
9. Sobre el particular, debe señalarse que en un sistema jurídico los derechos fundamentales no son absolutos y la colisión entre derechos fundamentales debe resolverse mediante una ponderación que determine el derecho que ha de prevalecer en el caso concretó, y no apelando a reglas de prioridad entre normas.
10. Por cuanto hace a la colisión entre el derecho a la información y el derecho a la intimidad o a la vida privada, el Poder Judicial de la Federación ha sostenido la **necesidad de resolver el conflicto apuntado mediante el ejercicio de ponderación; además, que el interés público que tenga cierta información, será concepto legitimador de las intromisiones en la intimidad o la vida privada, en donde este derecho debe ceder a favor del derecho a comunicar y recibir información, atendiendo a las circunstancias de cada caso en concreto,** tal y como se desprende de la tesis 1a. XLIII/2010, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, página 928, de marzo de 2010, Novena Época, materia constitucional.
11. En ese mismo sentido y atendiendo a la naturaleza del derecho a la protección de datos personales, por analogía, este debe ceder cuando exista un interés público mayor de acuerdo a las circunstancias del caso. Señalado lo anterior, resulta necesario realizar una ponderación de los dos intereses jurídicos tutelados que convergen en la controversia que se dirime; para lo cual, el artículo 184 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios prevé que cuando exista una colisión de derechos, este Instituto, al resolver el recurso de revisión, debe aplicar una prueba de interés público con base en elementos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. Para estos efectos, se entenderá por:

* **Idoneidad:** La legitimidad del derecho adoptado como preferente, que sea el adecuado para el logro de un fin constitucionalmente válido o apto para conseguir el fin pretendido;
* **Necesidad:** La falta de un medio alternativo menos lesivo a la apertura de la información, para satisfacer el interés público, y
* **Proporcionalidad:** El equilibrio entre perjuicio y beneficio a favor del interés público, a fin de que la decisión tomada represente un beneficio mayor al perjuicio que podría causar a la población.

1. En ese orden de ideas, resulta procedente analizar cada uno de los elementos referidos, partiendo de que, en el caso concreto, se estima como preferente el derecho de acceso a la información, bajo las consideraciones que se verterán a continuación.
2. **Idoneidad**.
3. Existe un fin constitucionalmente válido para dar a conocer el nombre de aquellas personas físicas a quienes les fue otorgada una licencia para conducir vehículos automotores que presten servicios de transporte público; dicho fin es la transparencia y la rendición de cuentas sobre el quehacer gubernamental que permita identificar a aquellas personas que han sido autorizadas por la Secretaría de Movilidad, para realizar actividades lícitas; esto es, las localizadas en el Manual de Procedimientos de la Dirección del Registro de Licencias y Operaciones, a efecto de determinar si la misma se realizó atendiendo a lo previsto en el Reglamento de Licencias del Sujeto Obligado.
4. Al respecto, es de señalar que la **transparencia** está orientada a maximizar el uso social de la información de los organismos gubernamentales, misma que sirve para exigir cuentas a las autoridades; mientras que la **rendición de cuentas** debe entenderse como la obligación de los funcionarios de responder por lo que hacen y la que atañe al poder de los ciudadanos para sancionar los resultados de la gestión en caso de que los servidores públicos hayan violado sus deberes públicos. Por lo que, estos dos conceptos están asociados de manera notable y por tanto, los gobernados requieren información para evaluar críticamente a sus gobernantes y exigirles cuentas.
5. En ese orden de ideas, la transparencia, al permitir y ayudar a la rendición de cuentas, funciona de doble manera, capacitadora, al permitir a la sociedad calificar el quehacer gubernamental, y cómo inhibidora de conductas y acciones que atenten contra **el interés público.**
6. Ahora bien, tal como se estableció en párrafos anteriores, para conducir un vehículo automotor de transporte público, únicamente podrá ser llevada a cabo, bajo el amparo de una licencia de conducir expedida, por la Secretaría de Movilidad, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en la normatividad relativa.
7. En ese orden de ideas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha definido el acceso a la información como un derecho en sí mismo y como un medio o instrumento para el ejercicio de otros derechos, **para que los gobernados ejerzan un control respecto del funcionamiento institucional de los poderes públicos, por lo que se constituye como una exigencia social de todo Estado de Derecho, y como un derecho colectivo o garantía social**, a fin de lograr la publicidad de los actos de gobierno y la transparencia de la administración pública. Lo anterior, a través de la jurisprudencia número P./J. 54/2008, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, página 743, Novena Época, en junio de dos mil ocho.
8. A mayor precisión, la transparencia de la información requerida permitiría a la sociedad, en general, conocer la cantidad de personas que acreditaron los elementos necesarios para poder obtener la licencia de conducir vehículos de transporte público y prestar el servicio dentro de la entidad.
9. Por ende, otorgar las licencias de conducir de las personas autorizadas a operar transporte público, **permite al particular corroborar que, fue emitida efectivamente por la autoridad competente.**
10. Bajo esa premisa, se entiende que la materia sobre la cual versa la presente solicitud, reviste un interés colectivo para la sociedad, dado que el Estado, es el encargado de regular la expedición y renovación de licencias de conducir vehículos automotores que brinden un servicio público dentro de extensión territorial.
11. Así, mediante la licencia de conducir de las personas operadoras de transporte público, permitiría una debida rendición de cuentas, pues es indispensable que se conozcan aquellos que están autorizados por parte de la Secretaría de Movilidad, por lo que, con ello se garantizaría que la sociedad tenga certeza de que **las licencias que portan los operadores, fueron efectivamente emitidas por el sujeto obligado, y no funcionan fuera del marco de la normatividad aplicable.**
12. Es bajo ese contexto, que se considera que el derecho de acceso a la información debe prevalecer frente a la protección del nombre de los titules de licencias, **pues resulta de interés público**, el que la sociedad pueda identificar a quiénes están autorizados para operar algún transporte público.
13. Igualmente, permitiría el escrutinio de la actividad de la autoridad encargada de emitir dichas licencias, en tanto que la sociedad podría conocer si se autorizaron a quienes cumplen con los requisitos establecidos en la normatividad aplicable e incluso si dicha licencia se encuentra vigente.
14. **Necesidad**
15. El sacrifico de la protección de la licencia de conducir vehículos de transporte público de las personas a las que les fue otorgada, como medio para lograr el fin constitucionalmente válido señalado previamente, se justifica en razón de que se satisface el interés mayor de los ciudadanos de conocer si los operadores del transporte público cuentan con la autorización correspondiente. Además, corrobora si la que portan dentro de su horario laboral, fue emitida por el Sujeto Obligado, **como regulador de la expedición y renovación, asimismo permiten identificar si la persona que conduce el transporte público es la autorizada por el Sujeto Obligado.**
16. Sobre el particular, el artículo 2° de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, dispone que entre los objetivos de la misma, se encuentran:
17. transparentar la gestión pública mediante la difusión de la información generada por los Sujetos Obligados;
18. promover, fomentar y la cultura de la transparencia, el acceso a la información y a la rendición de cuentas; y,
19. propiciar la participación ciudadana en la toma de las decisiones públicas, a fin de contribuir a la consolidación de la democracia.
20. En el caso concreto, se considera que no existe un medio menos oneroso que el ejercicio del derecho de acceso a la información para lograr el fin constitucionalmente válido, que es transparentar y rendir cuentas a la sociedad sobre las personas a quiénes se les otorgaron licencias, por parte de la Secretaría de Movilidad, para que pudieran conducir vehículos de transporte público, pues sólo por esta vía se puede conocer la forma en la cual el ente recurrido ejerció sus facultades emanadas en los diversos ordenamientos jurídicos, lo cual permitiría comprobar que los titulares de las licencias cumplieron con los requisitos establecidos en la ley.
21. En otras palabras, se considera que sólo con la difusión de la licencia de conducir, se podrían aportar los elementos necesarios a la ciudadanía para conocer que el chofer del transporte público cuenta con la autorización emitida por la autoridad competente.
22. Las Licencias de conducir deben portarse por el operador del transporte público mientras preste el servicio, si se negara el derecho de acceso a la información de dicho documento, se impediría que los ciudadanos pudieran corroborar que la licencia de conducir efectivamente fue emitida por el Sujeto Obligado a nombre de la persona responsable, pues al proteger dicho dato no se tendría certeza de que el titular corresponde con el emitido por la Secretaría en comento, pues debe tener presente que la licencia de conducir se entrega para brindar servicios a terceros, de ahí que se advierta un tema de interés público y que resulte imperativo la difusión de la información, advirtiéndose una desventaja de menor proporción en cuanto a la afectación de la protección de los datos personales.

**c) Proporcionalidad en sentido estricto**.

1. El sacrificio de la protección de las licencias de conducir vehículos de trasporte público de aquellas personas que se les otorgó, como medio para lograr el fin constitucionalmente válido señalado previamente, se justifica en razón de que se satisface el interés mayor de los ciudadanos de conocer si los operadores del transporte público, cuentan con la autorización correspondiente para llevar a cabo dichas actividades, las cuales son reguladas, específicamente por la Secretaría de Movilidad del Estado de México.
2. Aunado a ello, se aportarían elementos para determinar si esas autorizaciones se emitieron conforme a derecho y que las que las que portan fueron efectivamente emitidas por el Sujeto Obligado, esto es, que se cumplen con los requisitos legales que marcan las disposiciones antes estudiadas.
3. Conforme a lo anterior, el bien jurídico tutelado por el supuesto de confidencialidad previsto en el artículo 143, fracción I de la Ley de la materia, debe ceder frente al derecho de la sociedad de obtener información, en tanto que es mayor el beneficio que representa su publicidad, pues la misma da cuenta del correcto actuar del Sujeto Obligado como regulador de la expedición y renovación de licencias de conducir en la extensión territorial de la entidad, lo que permite a los usuarios identificar al operador de transporte para mayor seguridad.
4. En ese sentido, la difusión de las licencias conducir revisten un claro interés público, puesto que existe una necesidad colectiva de conocer y evaluar la emisión de dichas autorizaciones; en razón de que se trata de información generada con motivo del ejercicio de las funciones de la Secretaría de Movilidad, como regulador de la emisión y renovación de estas; lo anterior, conforme a la Norma Técnica para la Sustitución, Expedición, Renovación y Duplicado de Licencias para Conducir Vehículos Automotores Afectos al Servicio de Pasajeros en su Modalidad de Colectivo, Masivo, Individual, Especializado, Mixto, de Carga y de Servicios a la Comunidad y demás Normatividad Aplicable.
5. En conclusión, las licencias de conducir vehículos de transporte público son entregadas a aquellas personas físicas que cumplen con los requisitos y formalidades exigidas por la Secretaría de Movilidad**,** para operar un vehículo automotor de transporte público. Asimismo, la licencia de conducir debe portarse por el mismo operador, de acuerdo con la normatividad en materia. Por ello, el nombre del titular es de carácter público, toda vez que ayuda a verificar si el operador del transporte cuenta con la debida licencia, también así, se brinda la certeza de que la información contenida en la licencia que se porta corresponde con la entregada por el Sujeto Obligado.
6. **Dar a conocer las licencias de conducir, prevalece sobre la protección de los datos personales confidenciales de dichas personas, en razón del interés público que reviste;** por lo que, no resulta aplicable, en el presente caso, el artículo 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.
7. Ahora bien, es necesario referir que el particular no señaló la temporalidad de la cual requiere la información; motivo por el cual deberá ser entrega de lo solicitado, del periodo comprendido del 23 de octubre de 2023 al 23 de octubre del 2024, en atención al criterio 3/19 del INAI, mismo que se transcribe a continuación:

***Periodo de búsqueda de la información. Cuando la persona solicitante no señale el periodo respecto del cual requiere la información se considerará que el requerimiento se refiere al año inmediato anterior, contado a partir de la fecha de recepción de la solicitud.***

**QUINTO. De la versión pública.**

1. **Nociones generales.**
2. Debe destacarse, que debido a la información solicitada por el **RECURRENTE,** y que las documentales obran datos personales susceptibles de protegerse, así como información susceptible de clasificarse como **confidencial**, por lo que, el **SUJETO OBLIGADO** deberá de hacer la adecuada versión pública, protegiendo los datos que no son susceptibles de ser proporcionados.
3. No pasa desapercibido para este Órgano Garante que los sujetos obligadosserán responsables de los datos personales en su posesión y que, en caso de localizarse datos concernientes a terceros, éstos no podrán difundir, distribuir o comercializar los datos personales. Cabe destacar que, para la realización de la clasificación de la información, se deben seguir una serie de pasos y procedimientos, por lo que es menester reiterar los mismos:

|  |  |
| --- | --- |
| **a) Requisitos previos.** | **Los artículos 100 y 122 de la Ley Estatal y de la Ley General, respectivamente, señalan que si los Sujetos Obligados determinan que la información actualiza alguno de los supuestos de clasificación, es deber de los titulares de las áreas proponer su clasificación y no del Comité de Transparencia.**  **Al hacerlo tienen que precisar de qué información se trata, señalando el supuesto de clasificación (confidencialidad o reserva).**  **Además, se debe señalar el procedimiento, de los tres que establecen los artículos 132 y 106 de la Ley Estatal y General, respectivamente.**  **El último de estos requisitos previos consiste en que no se pueden emitir acuerdos de carácter general ni particular, esto es, no se puede hacer un acuerdo para clasificar de manera general todos los documentos de un expediente o área, sin individualizar su análisis y tampoco se puede hacer un acuerdo por cada dato que se vaya a clasificar dentro de un documento con diez datos, por ejemplo, susceptibles de ser clasificados.** |
| **b) Supuestos de clasificación.** | Las disposiciones constitucionales y legales en la materia establecen los dos supuestos generales para clasificar la información: por reserva y por confidencialidad.  Los artículos 116 y 143 de la Ley Estatal y de la Ley General, respectivamente, señalan los supuestos para que la información pueda ser clasificada como confidencial. Mientras que los artículos 105 y 130 de la Ley Estatal y de la Ley General, respectivamente, señalan que la aplicación de estos supuestos debe realizarse de manera restrictiva y limitada, por lo que debe acreditarse que se cumple con esta condición y no se pueden ampliar las excepciones o supuestos de clasificación aduciendo analogía o mayoría de razón.  El **Sujeto Obligado** debe identificar claramente el tipo de información y hacer un juicio de subsunción o encaje para acreditar que el supuesto de hecho corresponde estrictamente con la hipótesis jurídica. Esto también lo debe de realizar el servidor público habilitado y el titular del área que administra la información. |
| **c) Formalidades para emitir el acuerdo de clasificación.** | El Comité de Transparencia, según lo dispuesto en los artículos cuenta con las facultades para aprobar, modificar o revocar la clasificación de la información que haya propuesto.  Es necesario que **el acto reúna con los requisitos elementales**, entre ellos, que la autoridad que va a emitir el acto de autoridad sea la legalmente facultada para ello.  La decisión de aprobar, modificar o revocar la clasificación deberá de asentarse en un documento que registre la determinación a la que se llegue después de un análisis minucioso a partir de lo propuesto por el Titular del I. área que administra la información, cuyo análisis debe integrarse en la agenda de los asuntos a tratar en las sesiones, se insiste, a partir de las decisiones adoptadas previamente por los titulares de áreas y que son sujetas a control, en primera instancia, por el Comité de Transparencia. |
| **d) Requisitos de fondo del acuerdo de clasificación.** | Como se ha señalado antes, al hacer el juicio de subsunción o encaje entre el supuesto de hecho y la hipótesis jurídica, se debe acreditar la estricta correspondencia entre un elemento y otro. Ahora, en esta parte del procedimiento, que se desahoga en sede del Comité de Transparencia, la ley señala que la carga de la prueba, para justificar las restricciones, corresponde a los **Sujetos Obligados**, por lo que deberán fundar y motivar debidamente la clasificación.  De lo anterior, se desprende que para una correcta **clasificación total o parcial**, esto es determinar los datos que se suprimen en las versiones públicas, es necesario fundar y motivar, de manera correcta, la clasificación; considerando que todo acto que la autoridad pronuncie en el ejercicio de sus atribuciones, debe expresar los fundamentos legales que le dieron origen y las razones por las que se deben aplicar al caso concreto.  Así, en un acto de autoridad se cumple con la debida fundamentación cuando se cita el precepto legal aplicable al caso concreto y la debida motivación cuando se expresan las razones, motivos o circunstancias que tomó en cuenta la autoridad para adecuar el hecho a los fundamentos de derecho. De este modo, la persona que se sienta afectada pueda impugnar la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa.  En ese mismo sentido, el numeral trigésimo tercero fracción V de los Lineamientos Generales, precisa que para motivar la clasificación se deben acreditar las circunstancias de tiempo, modo y lugar.  Ahora bien, **para cada caso además de fundar y motivar**, se debe identificar con claridad que datos contenidos en las documentales que son susceptibles de suprimirse, por ejemplo; Clave Única de Registro de Población (CURP), Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.), claves de seguros, préstamos o descuentos personales, secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, entre otros. |
| **e) Condiciones especiales de la clasificación de la información como confidencial.** | Los artículos 148 y 120 de la Ley Estatal y de la Ley General, respectivamente, establecen que aun tratándose de datos personales, se podrán proporcionar, incluso sin solicitar el consentimiento de su titular.  En el caso de lo señalado en la fracción IV, será el Instituto quien deba aplicar la prueba de interés público, considerando también que como recientemente ha discutido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los servidores públicos nos encontramos sujetos a un régimen menor de protección.  Pero si la información que se pretende clasificar como confidencial no se encuentra en los supuestos de los artículos señalados y es posible, se deberá consultar al titular de los datos si permite o no el acceso. De no ser posible, la realización de la consulta, procede, fundando y motivando, la clasificación. |

1. Si el servidor público incumple con estas formalidades y entrega la información sin proteger los datos personales incumple con lo que estipula las disposiciones legales establecidas, asimismo que si entrega un documento testado sin el debido acuerdo de clasificación.

* **Registro Federal de Contribuyentes** (RFC)

1. Las personas físicas que deban presentar declaraciones periódicas o que están obligadas a expedir comprobantes fiscales, tienen que solicitar su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, esta inscripción es realizada por el Servicio de Administración Tributaria, quien entrega una cédula de identificación fiscal en donde consta la clave que asigna este órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de acuerdo con el artículo 27 del Código Fiscal de la Federación.
2. De acuerdo con lo establecido en el artículo en comento, esta clave se compone de trece caracteres alfanuméricos, con datos obtenidos de los apellidos, nombre (s), fecha de nacimiento del titular, más una homoclave que establece el sistema automático del Servicio de Administración Tributaria.
3. Ahora bien, la clave del Registro Federal de Contribuyentes es el medio de control que tiene la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Servicio de Administración Tributaria, para exigir y vigilar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes; mientras que los particulares tramitan dicho dato, con el único propósito de realizar mediante esa clave de identificación, operaciones o actividades de naturaleza fiscal.
4. Conforme a lo expuesto, el Registro Federal de Contribuyentes, es un dato personal, ya que hace a las personas físicas identificables, además de que las relaciona como contribuyentes de las autoridades fiscales. Es de destacar que dicho dato únicamente sirve para efectos fiscales y pago de contribuciones, por lo que se trata de un dato relevante únicamente para las personas involucradas, en el pago de estos, en el presente caso, del pago del Impuesto Sobre el Producto del Trabajo.
5. Lo anterior, resulta congruente con el Criterio 19/17 emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en el cual se señala lo siguiente:

*“****Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de personas físicas****. El RFC es una clave de carácter fiscal, única e irrepetible, que permite identificar al titular, su edad y fecha de nacimiento, por lo que es un dato personal de carácter confidencial.”*

1. De tal suerte, el Registro Federal de Contribuyentes de los servidores públicos no guarda relación con la transparencia de los recursos públicos, así como tampoco con el desempeño laboral que pueda tener una persona, por lo que constituye un dato personal confidencial al actualizar el supuesto normativo del artículo 143, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

* **Clave única de Registro de Población –CURP-.**

1. El artículo 36 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone la obligación de los ciudadanos de inscribirse en el Registro Nacional de Ciudadanos.
2. El artículo 85 de la Ley General de Población, prevé que corresponde a la Secretaría de Gobernación el registro y acreditación de la identidad de todas las personas residentes en el país y de los nacionales que residan en el extranjero.
3. Acorde con lo anterior, el artículo 22 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, establece en su fracción III, que la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identificación Personal tiene la atribución de asignar y depurar la Clave Única de Registro de Población a todas las personas residentes en el país, así como a los mexicanos que residan en el extranjero.
4. De conformidad con lo precisado por la propia Secretaría de Gobernación en la dirección <https://consultas.curp.gob.mx/CurpSP/html/informacionecurpPS.html>, la Clave Única del Registro de Población CURP-, es un instrumento de registro que se asigna a todas las personas que viven en el territorio nacional, así como a los mexicanos que residen en el extranjero y se compone de dieciocho elementos, representados por letras y números, que **se generan a partir de los datos contenidos en el documento probatorio de la identidad del interesado** (acta de nacimiento, carta de naturalización o documento migratorio) de la siguiente forma:

• El primero y segundo apellidos, así como al nombre de pila.

• La fecha de nacimiento.

• El sexo.

• La entidad federativa de nacimiento.

Los dos últimos elementos de la CURP evitan la duplicidad de la Clave y garantizan su correcta integración.

1. Como se desprende de lo anterior, la CURP es un dato personal confidencial, ya que por sí sola brinda información personal de su titular y lo hace identificado e identificable, motivo por el cual se aprueba su eliminación de las versiones públicas, por lo que se trata de un trámite administrativo requerido por la autoridad federal para hacer identificables a las personas.
2. Resulta aplicable en la especie, como argumento orientador, el Criterio 3/10, emitido por el INAI.

***Clave Única de Registro de Población (CURP) es un dato personal confidencial.*** *De conformidad con lo establecido en el artículo 3, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dato personal es toda aquella información concerniente a una persona física identificada o identificable. Por su parte, el artículo 18, fracción II de la Ley considera información confidencial los datos personales que requieren el consentimiento de los individuos para su difusión, distribución o comercialización en los términos de esta Ley. En este sentido, la CURP se integra por datos personales que únicamente le conciernen a un particular como son su fecha de nacimiento, su nombre, sus apellidos y su lugar de nacimiento, y esta es información que lo distingue plenamente del resto de los habitantes, por lo que es de carácter confidencial, en términos de lo dispuesto en el artículos anteriormente señalados.*

1. De acuerdo con lo anterior, se la clave CURP, es un dato personal confidencial, en términos del artículo 143, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

* **Nombre de persona física, Domicilio**

1. El nombre se integra con el sustantivo propio y el primer apellido de los padres, en el orden que, de común acuerdo determinen; asimismo es la manifestación principal del derecho subjetivo a la personalidad y atributo de esta en términos del artículo 2.3 del Código Civil del Estado de México, de tal suerte, el nombre *perse* es un elemento que hace a una persona física identificada o identificable, por lo que, se considera un dato personal.
2. Ahora bien, de acuerdo a lo señalado en los artículos 2.3 y 2.5, fracción V del Código Civil del Estado de México, el domicilio es un atributo de la personalidad y un derecho de las personas. Este tiene como propósito que una persona pueda establecerse temporal o permanentemente en un lugar determinado, para habitar, establecer su centro de trabajo o negocios; ahora bien, su inclusión en el nombramiento se puede decir que sólo tiene como objetivo brindar elementos que permitan conocer y hacer identificable a la persona que se designa, sin que esta información sea de relevancia para el interés público, así como tampoco tiene relevancia en el ejercicio de atribuciones de los servidores públicos. Por lo que **el domicilio particular** es confidencial, en términos del artículo 143, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

* **Estado civil.**

1. El estado civil es un atributo de la personalidad, de acuerdo al artículo 2.3 del Código Civil del Estado de México, e indica si las personas son solteras o casadas y sólo se comprueba con las constancias relativas del Registro Civil. Por lo que es un tema que tiene que ver con la vida privada, ya que, para acceder a un cargo público, el estado civil de las personas es irrelevante, ya que tener uno u otro no influye en el mejor o menor desempeño de un cargo público.
2. De esta manera, se trata de un dato personal confidencial que tiene que ver únicamente con la vida privada de las personas, motivo por el cual se considera un dato personal en términos del artículo 143, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

* **Teléfono y celular particular.**

1. El número asignado a un teléfono particular o celular permite localizar a una persona física identificada o identificable, ya sea a través de un dispositivo móvil o bien, en un lugar como el domicilio.
2. En ese sentido, se colige que si bien fue proporcionado por la ahora servidora pública que ocupa el cargo de Titular de la Unidad de Transparencia, lo cierto es que fue proporcionado como número contacto, para poder ser localizada de manera privada; por lo que, la titularidad de este, al igual que el correo electrónico analizado, corresponde a la persona física en su calidad de particular y no como servidor público.
3. En tales consideraciones, dicho dato personal es susceptible de ser clasificado como confidencial, con fundamento en el artículo 143, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
4. Si el servidor público incumple con estas formalidades y entrega la información sin proteger los datos personales incumple con lo que estipula las disposiciones legales establecidas.
5. Por lo tanto, en consecuencia y en mérito de lo expuesto en líneas anteriores, resultan fundadas las razones o motivos de inconformidad hechos valer por el **RECURRENTE** dentro del recurso de revisión **07483/INFOEM/IP/RR/2024**; por ello, y con fundamento en la fracción III del numeral 186 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, se modifica la respuesta a la solicitud de información **00763/SMOV/IP/2024.**
6. Por lo anteriormente expuesto y fundado, este **ÓRGANO GARANTE** emite los siguientes:

**R E S O L U T I V O S**

**PRIMERO.** Resultan fundadas lasrazones o motivos de inconformidad hechos valer en el recurso de revisión **7483/INFOEM/IP/RR/2024,** en términos de los **Considerandos** **CUARTO y QUINTO** de la presente resolución.

**SEGUNDO.** Se **MODIFICA** la respuesta de la Secretaría de Movilidad a la solicitud de información **00763/SMOV/IP/2024** yse **ORDENA** entregar vía Sistema de Acceso a la Información Mexiquense **(SAIMEX)**, de ser procedente en versión pública, el o los documentos donde conste lo siguiente:

**De las Operadoras de Transporte Público del Estado de México, del 23 de octubre del 2023 al 23 de octubre de 2024.**

1. **Licencia de conducir**
2. **Tarjeta de identificación, (posee la Unidad de Transporte que manejan y a la empresa que pertenecen)**

Para efectos de lo anterior, se deberá emitir el Acuerdo del Comité de Transparencia en términos de los artículos 49, fracción VIII y 132, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, en el que funde y motive las razones sobre los datos que se supriman o eliminen dentro del soporte documental respectivo objeto de las versiones públicas que se formulen y se pongan a disposición **del RECURRENTE**.

Para el caso de que el **SUJETO OBLIGADO**, no localice la información que se **ORDENA**, se deberá de emitir el Acuerdo de Inexistencia en términos de los artículos 49, fracciones II y XIII, 169 y 170 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios que al respecto emita su Comité de Transparencia, poniéndolo a disposición del **RECURRENTE.**

**TERCERO.** NOTIFÍQUESE la presente resolución al Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado vía SAIMEX, para que conforme al artículo 186 último párrafo, 189 segundo párrafo y 194 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; **dé cumplimiento a lo ordenado dentro del plazo de diez días hábiles,** e informe a este Instituto en un plazo de tres días hábiles siguientes sobre el cumplimiento dado a la presente y, se le apercibe que en caso de negarse a cumplir la presente resolución o hacerlo de manera parcial, se le impondrá una medida de apremio de conformidad con lo previsto en los artículos 198, 200, fracción III; 214, 215 y 216 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

**CUARTO.** De conformidad con el artículo 198 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, de considerarlo procedente, el **SUJETO OBLIGADO** de manera fundada y motivada, podrá solicitar una ampliación de plazo para el cumplimiento de la presente resolución.

**QUINTO. Notifíquese** al **RECURRENTE** la presente resolución a través del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX).

**SEXTO.**  Se hace del conocimiento del **RECURRENTE** que, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, en caso de que considere que la resolución le cause algún perjuicio podrá impugnarla vía juicio de amparo en los términos de las leyes aplicables.

ASÍ LO RESUELVE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS JOSÉ MARTÍNEZ VILCHIS, MARÍA DEL ROSARIO MEJÍA AYALA, SHARON CRISTINA MORALES MARTÍNEZ, LUIS GUSTAVO PARRA NORIEGA Y GUADALUPE RAMÍREZ PEÑA; EN LA DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL VEINTE (20) DE MARZO DE DOS MIL VEINTICINCO, ANTE EL SECRETARIO TÉCNICO DEL PLENO ALEXIS TAPIA RAMÍREZ.

1. Convención Americana sobre Derechos Humanos. Artículo 13. [↑](#footnote-ref-1)
2. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo sexto, sección A, fracción I. [↑](#footnote-ref-2)
3. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Claude Reyes y otros vs. Chile. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C. No. 151. Párr. 86. [↑](#footnote-ref-3)
4. Ibídem. Parr. 87. [↑](#footnote-ref-4)
5. Artículo 50, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios. [↑](#footnote-ref-5)
6. Artículo 51, Ídem. [↑](#footnote-ref-6)
7. Artículo 58, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios. [↑](#footnote-ref-7)
8. Artículo 59, Ídem. [↑](#footnote-ref-8)